



**Asamblea General
Consejo de Seguridad**

Distr.
GENERAL

A/49/585
S/1994/1220
31 de octubre de 1994

ORIGINAL: ESPAÑOL

ASAMBLEA GENERAL

Cuadragésimo noveno período de sesiones

Tema 42 del programa

LA SITUACIÓN EN CENTROAMÉRICA: PROCEDIMIENTOS
PARA ESTABLECER LA PAZ FIRME Y DURADERA, Y
PROGRESOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA REGIÓN
DE PAZ, LIBERTAD, DEMOCRACIA Y DESARROLLO

Nota del Secretario General

En el documento adjunto figura el duodécimo informe del Director de la División de Derechos Humanos de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL), que abarca el período comprendido entre el 1° de julio y el 30 de septiembre de 1994. Como se recordará (véase S/23999, párr. 3), se decidió que la labor de la ONUSAL en relación con el Acuerdo sobre Derechos Humanos de San José (A/44/971-S/21541, anexo) continuara siendo tema de una serie de informes por separado.



Anexo

DUODÉCIMO INFORME DEL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA
MISIÓN DE OBSERVADORES DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL SALVADOR (ONUSAL)

(1º de julio a 30 de septiembre de 1994)

ÍNDICE

| <u>Capítulo</u> | <u>Párrafos</u> | <u>Página</u> |
|--|-----------------|---------------|
| I. INTRODUCCIÓN | 1 - 5 | 3 |
| II. CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL: TAREA INCONCLUSA PERO EN DIRECCIÓN POSITIVA | 6 - 69 | 4 |
| A. La administración de justicia | 8 - 18 | 4 |
| B. Las reformas legislativas | 19 - 22 | 6 |
| C. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos | 23 - 31 | 7 |
| D. La Policía Nacional Civil | 32 - 48 | 9 |
| E. La emergencia del sistema penitenciario . . | 49 - 62 | 13 |
| F. Las organizaciones no gubernamentales . . . | 63 - 67 | 16 |
| G. La fuerza armada | 68 - 69 | 17 |
| III. EXAMEN DE LA VERIFICACIÓN ACTIVA DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | 70 - 104 | 17 |
| A. Derecho a la vida | 70 - 88 | 17 |
| 1. Ejecuciones arbitrarias o extralegales . | 71 - 77 | 17 |
| 2. Amenazas de muerte | 78 - 88 | 19 |
| B. Derecho a la integridad personal | 89 - 99 | 21 |
| 1. Torturas | 89 - 95 | 21 |
| 2. Malos tratos | 96 - 99 | 22 |
| C. Derecho a la seguridad personal | 100 | 23 |
| Desapariciones forzadas o involuntarias . . | 100 | 23 |
| D. Derecho a la libertad personal | 101 - 104 | 23 |
| IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 105 - 116 | 23 |
| V. ESTADÍSTICAS | | 27 |

/...

I. INTRODUCCIÓN

1. La División de Derechos Humanos ha venido informando periódicamente al Secretario General acerca de la situación de los derechos humanos en El Salvador, fundamentalmente sobre la base de la verificación activa de casos o situaciones que constituyen o son susceptibles de constituir violaciones a los derechos humanos. A partir de las denuncias recibidas por la ONUSAL se han elaborado las correspondientes estadísticas, que han contribuido a detectar las tendencias del estado de los derechos humanos durante períodos determinados, así como a observar las tendencias generales.
2. No obstante, hay que anotar que la evaluación del grado de progreso o de regresión en la consolidación del sistema de protección de los derechos humanos en El Salvador no puede ser efectuada exclusivamente sobre la base de la cuantificación de casos. Las variaciones numéricas pueden tener múltiples orígenes y presentarse sin solución de continuidad. En ese sentido, la evaluación debe referirse principalmente al estado de las instituciones jurídicas y políticas que sustentan la protección de los derechos humanos en el país y que, en este estadio del proceso de paz, puedan hacer perdurables las mejoras obtenidas.
3. La ONUSAL, en la perspectiva de su retiro del país, sin descuidar la verificación de denuncias de violaciones a los derechos humanos, ha venido poniendo progresivamente el acento de su verificación activa en el apoyo institucional, que es donde radica la posibilidad de evaluar integralmente la situación y determinar si existe un grado de "desarrollo sostenible" de la protección de los derechos humanos al término previsible de la Misión. Este énfasis tiene su razón de ser en que las instituciones nacionales de carácter permanente deben asumir plenamente la responsabilidad primaria de defender y proteger los derechos humanos en el país, mientras que la ONUSAL, mecanismo excepcional y temporal, gradualmente desvanece su presencia de la vida nacional.
4. En esta perspectiva es que la División de Derechos Humanos reforzó, desde julio, su estrecha coordinación con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en la recepción e investigación de las denuncias que le fueron presentadas. A la vez y en la misma lógica, la División ha venido ampliando sus programas de cooperación con las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos y la administración de justicia en el país, a efectos de contribuir a su reforma y consolidación, siguiendo las pautas fijadas por las partes en los Acuerdos de Paz.
5. Con las anteriores consideraciones, el presente informe se elabora con la intención de ilustrar al Secretario General, y por su conducto al Consejo de Seguridad, acerca de la situación de los derechos humanos en El Salvador, en especial desde la perspectiva del grado de desarrollo y madurez de las instituciones responsables de su defensa, protección y promoción. Por ello el informe no guarda la misma estructura de los anteriores. El informe tiene un segundo capítulo referido a la consolidación institucional y un tercer capítulo en el que se efectúa el examen de la verificación activa de los derechos humanos a partir de las denuncias procesadas por la ONUSAL.

/...

II. CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL: TAREA INCONCLUSA PERO
EN DIRECCIÓN POSITIVA

6. La protección y realización efectiva de los derechos humanos en El Salvador depende de la consolidación del Estado de derecho y de la democracia. Esto debe expresarse sustantivamente en la creación y el adecuado funcionamiento de las instituciones y de los sistemas de protección de los derechos humanos previstos por los acuerdos de paz. Este proceso, aunque está inconcluso, avanza en una dirección positiva.

7. La elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, que abre nuevas condiciones para la reestructuración del aparato judicial y su depuración; el despliegue paulatino de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el territorio nacional y las acciones dirigidas al fortalecimiento de su sistema de tutela; y la continuidad en el despliegue de la Policía Nacional Civil, junto con el nombramiento, durante el período que comprende este informe, de su Inspector General, y la adopción de medidas conducentes a corregir las fallas detectadas en esa institución policial, son algunas acciones que permiten afirmar que el fortalecimiento institucional tiene progresos, a la vez que ofrece mejores condiciones para la ejecución de las recomendaciones pendientes en materia de administración de justicia y derechos humanos. Subsisten, no obstante, serios y preocupantes retrasos en materias tales como la adhesión a ciertos instrumentos internacionales y el proceso de reforma legal.

A. La administración de justicia

8. Durante el período que comprende este informe, la Asamblea Legislativa, en un acto sin precedentes en la vida nacional, eligió por consenso a una nueva Corte Suprema de Justicia, integrada por destacados y representativos juristas. Ésta constituye sin duda una de las más saludables expresiones del pluralismo y la democratización, que empiezan a ser realidad en El Salvador. A la vez, permite afirmar que el cuerpo colegiado cuenta con las condiciones para conseguir la independencia y la autonomía que le son esenciales como cabeza del Órgano Judicial.

9. Inmediatamente después de asumir el cargo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia expresaron su intención de proceder a la revisión y reestructuración del aparato administrativo y a la depuración del Órgano Judicial, como pasos previos a la profundización de la reforma judicial, que requiere, como los propios magistrados han señalado, la realización de acciones en muy diversas órdenes.

10. Esta voluntad de los magistrados de la Corte ya se ha comenzado a concretar, mediante algunas acciones de reorganización del aparato judicial. En mi undécimo Informe había reiterado mi preocupación acerca de la forma en que era conducido el Instituto de Medicina Legal por su Director anterior. La nueva Corte Suprema de Justicia ha tomado decisiones efectivas para adecuar el funcionamiento del Instituto de Medicina Legal a los términos que le fija la ley, designando además a una destacada y respetada profesional para que lo encabece. Por otra parte, la Corte ha recibido con interés la información que le ha transmitido la ONUSAL acerca de miembros del Órgano Judicial que, de

/...

acuerdo a quejas verificadas, han incurrido en conducta funcional, la cual se suma a la evaluación efectuada por el Consejo Nacional de la Judicatura.

11. Durante los meses de agosto y septiembre la División de Derechos Humanos realizó, en estrecha coordinación con el Consejo Nacional de la Judicatura y su Escuela de Capacitación Judicial (con el apoyo de la Unión Europea), una serie de cursos a nivel nacional para contribuir a la especialización de los magistrados, los jueces de primera instancia y los jueces de paz, en la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos que hacen parte de la legislación salvadoreña, con la finalidad de que las apliquen en sus razonamientos y fallos de manera preferencial y concordada con las normas de origen interno, frente a las cuales tienen superioridad jerárquica. A estos cursos asistieron también fiscales, previamente seleccionados por la Fiscalía General de la República.

12. En el marco de estos eventos de cooperación, se realizó una encuesta anónima de opinión entre los jueces de paz, los jueces de primera instancia y los fiscales. Dicha encuesta permitió obtener valiosos elementos sobre la percepción de los jueces acerca del funcionamiento del sistema judicial que es coincidente, en líneas generales, con la percepción de los fiscales.

13. Algunas respuestas son ilustrativas. Preguntados acerca de la vigencia de los derechos humanos, si el 71% de los jueces de primera instancia la consideran "insuficiente", un alto 91.3% de los jueces de paz tiene la misma percepción. De otro lado, preguntados acerca de los problemas que afectan la independencia de los jueces, un alto 29.6% de los jueces de paz piensa que el principal problema son las presiones jerárquicas (34% en los jueces de primera instancia). Los resultados demuestran una vez más que es necesario proceder a las reformas dirigidas a garantizar la autonomía e independencia de que los jueces deben gozar en el ejercicio de las funciones judiciales frente a sus superiores. Revelan, además, una actitud crítica respecto a la situación de los derechos humanos que, en principio, apuntaría a una conducta potencialmente dinámica en dar respuestas adecuadas.

14. De otro lado, el hecho de que los jueces (30,7% de los jueces de paz y 27.7% de los jueces de primera instancia) encuentren la mayor dificultad de su relación funcional con la Procuraduría General de la República, indica nuevamente la necesidad de que se incremente el número de defensores públicos y se amplíe su formación y especialización a través de cursos y publicaciones, tarea que podría ser realizada a través de la Escuela de Capacitación Judicial con apoyo de la comunidad internacional.

15. En otro orden de ideas, preguntados sobre las reformas legislativas que consideran de más urgente aprobación los jueces consideran urgente proceder, en primer término, a la aprobación, en segunda vuelta, de las reformas constitucionales en curso; en segundo lugar, a la aprobación de los nuevos códigos penal y procesal penal y la ley penitenciaria; en tercer lugar, a la derogación de la confesión extrajudicial; en cuarto lugar, a la elaboración y aprobación de un proyecto de ley sobre el hábeas corpus; y en quinto lugar, a la regulación legal de los procedimientos de captura y la reducción de los plazos de la detención administrativa. Estas apreciaciones son, pues, coincidentes con

/...

las recomendaciones efectuadas por la Comisión de la Verdad y la División de Derechos Humanos.

16. Al ser preguntados sobre las principales deficiencias de la administración de justicia, susceptibles de constituir violaciones al debido proceso legal, tanto los jueces de paz como los de primera instancia convienen en señalar en primer término el elevado número de presos sin condena. Los jueces de paz siguen esta deficiencia en su orden con las de la falta de aplicación de la nulidad en casos de declaraciones rendidas bajo coacción, las omisiones de la justicia en casos de detenciones arbitrarias, la falta de presencia de los jueces en algunas diligencias importantes, y por último, las omisiones de la justicia en casos de muerte. Por su parte, los jueces de primera instancia ponen en segundo lugar la falta de presencia de los jueces en algunas diligencias importantes, seguida de la falta de aplicación de la nulidad en casos de declaraciones rendidas bajo coacción, las omisiones de la justicia en casos de detenciones arbitrarias, y por último, las omisiones de la justicia en casos de muerte.

17. De acuerdo con estos datos, resulta indispensable que la nueva Corte Suprema de Justicia adopte medidas urgentes respecto a los casos citados, a través de auditorías y otras medidas para resolver la actual problemática. En ese sentido, es sustantiva la vinculación del Consejo Nacional de la Judicatura, a través de su Escuela de Capacitación Judicial, así como del Ministerio de Justicia en la búsqueda y ejecución de soluciones a corto plazo.

18. Con el nombramiento de la nueva Corte Suprema de Justicia se abren nuevas y mejores condiciones para el fortalecimiento del sistema judicial salvadoreño. Si bien es cierto que los problemas de la administración de justicia, por su profundidad y complejidad demandan de un esfuerzo sostenido, a largo plazo, también es cierto que existe una serie de recomendaciones cuya ejecución, esencial para sentar las bases del proceso de las reformas del sistema, puede efectuarse en el corto plazo. Tal es el caso de la reestructuración administrativa y de la depuración del Órgano Judicial, tareas en las que se comienza a avanzar, gracias a la voluntad de la nueva Corte Suprema de Justicia. No obstante, otras de estas tareas, señaladas en la encuesta por los propios jueces y fiscales del país y coincidentes con las recomendaciones efectuadas reiteradamente por la División de Derechos Humanos y por la Comisión de la Verdad, lamentablemente no han gozado del impulso que puede y debe dárseles. Ese es el caso de la aprobación de las reformas legislativas, cuyo inexplicable retraso es uno de los principales obstáculos en la actualidad para el mejoramiento de la administración de justicia y de los medios de protección de los derechos humanos en el país.

B. Las reformas legislativas

19. Debo manifestar mi preocupación por el grave retraso que presenta el proceso de reformas legislativas. Durante el período que cubre este informe los avances en esa materia han sido mínimos. Las reformas constitucionales aprobadas en primera vuelta por la anterior Asamblea Legislativa, las cuales recogen algunas de las recomendaciones propuestas por la División de Derechos Humanos y por la Comisión de la Verdad, permanecen en espera de su aprobación.

/...

En la misma circunstancia se encuentran los proyectos de códigos penal, procesal penal y de ley penitenciaria, pese a que los dos primeros fueron presentados a la Asamblea Legislativa en el mes de mayo próximo pasado y el último durante el mes de junio.

20. La demora en la aprobación de los códigos penal y procesal penal retrasa, además, la aprobación de una serie de reformas parciales que han sido recomendadas y están introducidas en los proyectos, como la de la reducción del término de la detención administrativa, la de regular la conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en términos de asegurar el respeto a los derechos humanos, la eliminación de la confesión extrajudicial, la regulación de los principios básicos para las capturas, entre otras. La aprobación de estas reformas legales ciertamente reviste complejidades que exigen un análisis concienzudo y minucioso al interior de las comisiones legislativas, pero esto no debe ser óbice para que se proceda a ellas en el menor tiempo posible.

21. De igual forma, permanecen incumplidas las recomendaciones relativas a la ley de hábeas corpus, al perfeccionamiento del Consejo Nacional de la Judicatura en cuanto a su composición y atribuciones y en cuanto a una nueva ley de la carrera judicial, temas frente a los cuales no se han presentado iniciativas a la Asamblea Legislativa. En la misma circunstancia se encuentra la recomendación para derogar la antigua Ley de Policía de 1886.

22. Es igualmente inquietante que no se haya procedido a la ratificación o aprobación de diversos instrumentos internacionales, en especial del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos^a, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura^b y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales^c, así como a la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La aprobación de estos instrumentos representaría un importante avance en la afirmación del sistema de protección de los derechos humanos en El Salvador.

C. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

23. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, nacida de los Acuerdos de Paz, es la institución nacional con mayores facultades, y por ende mayores responsabilidades, en la protección y promoción de los derechos humanos. El eficaz cumplimiento de estas facultades, en la medida en que se acerca el retiro de la ONUSAL de El Salvador, adquiere carácter urgente y perentorio. Por eso señalé al Secretario General en mi informe anterior que le mantendría informado acerca de los avances en esta materia.

24. Con la percepción de la naturaleza transitoria de la ONUSAL, la División de Derechos Humanos ha señalado persistentemente la necesidad de que la Procuraduría impulse con mayor ahínco su proceso de consolidación y ha exhortado permanentemente al gobierno y a la comunidad internacional de donantes para que colaboren con la Procuraduría en ese esfuerzo. El objetivo de lograr un adecuado funcionamiento de la Procuraduría me ha llevado a destinar un

/...

importante porcentaje de recursos de la División de Derechos Humanos a la cooperación técnica con esa institución.

25. Debo señalar mi satisfacción por los avances obtenidos en ese marco de cooperación durante el período que comprende este informe. La cooperación entre la ONUSAL y la Procuraduría se ha desarrollado sobre la base de un programa de asistencia técnica que comprende las áreas de recepción, calificación jurídica e investigación de hechos o situaciones susceptibles de constituir violaciones a los derechos humanos. El programa se ha desarrollado en la totalidad de las oficinas de la Procuraduría en el país, a través de un mecanismo mediante el cual se garantiza que las denuncias que son presentadas a la ONUSAL sean también recibidas por la Procuraduría, siempre que no existan condiciones de confidencialidad por parte de los denunciantes, y posteriormente objeto de un proceso de investigación conjunta.

26. La adopción de este mecanismo de verificación conjunta, que ha comenzado a funcionar a partir de julio, ha implicado para la División de Derechos Humanos destacar, de manera permanente, oficiales jurídicos y policiales que asesoran el trabajo de recepción, registro, calificación jurídica y trámite de investigación de las denuncias en las oficinas de la Procuraduría. De esta manera se garantiza que a la vez que la ONUSAL continúa ejerciendo su mandato de verificación, se hace un traspaso gradual de los casos a la institución nacional y se brinda asistencia técnica permanente en el terreno.

27. A través de este mecanismo han venido obteniéndose resultados positivos en varias órdenes: se está transmitiendo a los funcionarios de la Procuraduría la experiencia de la ONUSAL en la verificación, tanto a nivel jurídico como a nivel de las técnicas de investigación policial; se ha colaborado en la profesionalización de los funcionarios de la Procuraduría en el manejo de las normas del derecho internacional de los derechos humanos y en su aplicación en el trabajo cotidiano, así como la adopción, con los ajustes necesarios, de las categorías de análisis y las definiciones y criterios operativos comúnmente aceptados en materia de derechos humanos.

28. La verificación conjunta ha sido determinante para que a partir del mes de julio la Procuraduría haya ampliado su cobertura de protección. La Procuraduría asume ahora un número mayor de casos, en parte dado que la ONUSAL le traspasa los casos que le son denunciados. Asimismo, cuenta con una mayor capacidad de investigación, pues en su desarrollo cooperan de manera permanente funcionarios de la Misión. Estas actividades, coincidentes con el inicio de un proceso interno de reformas del sistema de tutela de la Procuraduría, realizado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha contribuido a un aumento significativo del número de resoluciones. Sólo durante los meses de agosto y septiembre la Procuraduría emitió 47 resoluciones, frente a 27 que había emitido desde enero hasta julio de 1994. Este importante avance requiere, no obstante, ser complementado con un mecanismo eficiente de seguimiento de las resoluciones, mediante el cual se controle su aplicación. A su vez, la cooperación ha contribuido al mejoramiento de la capacidad de la Procuraduría para la sistematización, análisis y comunicación de la situación de los derechos humanos en el país.

/...

29. Desde una perspectiva más general, la cooperación ha contribuido sustancialmente a establecer un mecanismo de empalme, que permitirá que la cobertura y actividades de verificación que la ONUSAL ha desarrollado en El Salvador sean plenamente asumidas por la Procuraduría, evitando así desconciertos en la población al momento del retiro definitivo de la Misión. En ese sentido, es muy grato verificar que la población cada vez más acude en demanda de sus derechos ante la Procuraduría, lo que es permanentemente alentado por los observadores de la ONUSAL.

30. Estas acciones han sido complementadas mediante seminarios de profesionalización en diversos temas de derechos humanos. Se han efectuado durante el período de este informe jornadas de especialización sobre técnicas de calificación y tipología operativa del derecho de los derechos humanos, las cuales han redundado en el fortalecimiento sustantivo del trabajo de verificación. Estas jornadas han estado referidas también al conocimiento de las técnicas de investigación policiales y judiciales de presuntas violaciones a los derechos humanos. En esta materia, se han cubierto tanto los aspectos relativos a la investigación propia de los derechos humanos, como de las específicas de la administración de justicia y de la criminalística. Con ello se ha contribuido a que la Procuraduría esté en mejores condiciones de ejercer el control de la legalidad de tales investigaciones. Con base en un cronograma ya convenido, la ONUSAL continuará apoyando la realización de seminarios de especialización.

31. Es de destacar que, al momento de escribirse este informe, la Procuraduría ha avanzado en su despliegue territorial, contando ya con ocho delegaciones departamentales, aprestándose a inaugurar otras dos. Pero es necesario decir, simultáneamente, que muchas de ellas operan en condiciones precarias. La carencia de personal calificado, de vehículos suficientes y de recursos técnicos y logísticos, son algunos de los mayores obstáculos que impiden que la Procuraduría esté en condiciones de ejercer eficientemente sus facultades en el interior del país. Una de las explicaciones de este resultado es, por cierto, las restricciones presupuestales. En ese sentido, es necesario que la voluntad política del Gobierno de fortalecer la Procuraduría, manifestada por el Presidente de la República en su discurso ante el plenario del cuadragésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General, se concrete en un aumento significativo de su asignación presupuestal, lo cual también corresponde a la Asamblea Legislativa.

D. La Policía Nacional Civil

32. El despliegue de la Policía Nacional Civil (PNC) se dio a un ritmo acelerado y en un clima de inseguridad ciudadana. En la actualidad, el proceso en el despliegue territorial requiere ser complementado con un mejoramiento esmerado de la calidad de la actuación policial. La ONUSAL ha venido efectuando, en esa perspectiva, una extensa labor en conjunto con la PNC. Un programa de verificación en todos los puestos, subdelegaciones y delegaciones de la PNC fue efectuado con éxito en septiembre, contando con la plena cooperación de la dirección de la institución. Adicionalmente, destacan la ejecución de un proyecto de cursos taller para mandos de ese cuerpo policial, la elaboración y publicación de la Guía de Normas y Procedimientos de la PNC y, más

/...

recientemente, el inicio de la realización de cursos de refuerzo para mandos, como actividades dirigidas a promover e impulsar la consolidación de la institución policial en el marco de los acuerdos de paz. No obstante, estas acciones requieren un esfuerzo sostenido y una mayor versatilidad de la PNC en la adopción de medidas correctivas.

33. El Salvador cuenta hoy con un nuevo cuerpo de seguridad basado en una nueva doctrina. Ese reto enorme supone, en los hechos, la creación en el país del concepto mismo de policía, desligado de una concepción militarista y represiva. A las deficiencias de ciertas instituciones, como el aparato judicial, por ejemplo, se suma la resistencia de sectores minoritarios, como factores que dificultan el desempeño de la PNC. No debo dejar de señalar, en ese sentido, mi preocupación por la ocurrencia, durante el período, de tres hechos confusos en los que estuvo en riesgo la vida del Director de la PNC, los que si bien parecen obedecer a razones de mera delincuencia común, son también interpretados por algunos sectores como actos contra la institución policial. En ese contexto, complejo y difícil, es dentro del que se han recibido denuncias de violaciones a los derechos humanos atribuidas a la PNC, las cuales paso a referir.

34. Los casos admitidos por la División de Derechos Humanos contra la PNC son 87 durante el período. De las mismas, en 26 casos, luego de las tareas de verificación realizadas, se confirmó la violación denunciada. En 21 casos se verificó que la actuación policial no había violado los derechos humanos; 7 casos resultaron imposibles de verificar por ausencia de elementos objetivos de juicio; y 33 se mantienen pendientes, al continuarse respecto a ellos las investigaciones.

35. Las violaciones al derecho a la vida denunciadas en el período fueron 9 (10,3% del total), de las cuales 8 refirieron a ejecuciones arbitrarias (3 verificadas positivamente y 5 pendientes), y 1 a amenazas de muerte, la que se verificó positivamente. Los casos de ejecución arbitraria verificados positivamente corresponden a la muerte del Sr. Rodolfo Iraheta Contreras, de 68 años, baleado el 16 de septiembre de 1994, por un agente de la PNC, en el contexto de su intervención en una violenta crisis familiar en el domicilio de la víctima, situado en la Comunidad Iberia de San Salvador; el de Pedro Osmín Iraheta, muerto por disparos efectuados por una patrulla de la PNC el 7 de agosto de 1994, en una carretera vecinal del cantón San Felipe, departamento de San Vicente, cuando, en estado de ebriedad, no respetó una orden de alto; y el caso de Orlando Saravia Rodríguez, quien, el 18 de septiembre de 1994, en El Tránsito, San Miguel, falleció en medio de un operativo realizado por efectivos sin sus uniformes.

36. Debe destacarse que las ejecuciones arbitrarias señaladas no responden a una actitud planificada de los efectivos involucrados, ni menos aún a una política sistemática de la acción policial. Lo que sí se ha verificado es que en todos estos casos se aprecia una desmedida utilización de las armas de fuego por parte de los efectivos policiales, así como una tendencia a obstaculizar las investigaciones posteriores, llegando hasta la alteración de los indicios y de la escena del crimen. En el caso de la muerte del Sr. Iraheta Contreras, los testigos manifiestan que la víctima quedó herida durante largo tiempo, mientras los agentes involucrados buscaban alguna persona que avalara su versión de los hechos. También se aprecian irregularidades en el caso del Sr. Osmín Iraheta,

/...

en San Vicente, donde la escena del crimen fue alterada y posteriormente se sucedieron contradicciones en las diferentes versiones relatadas por los testigos y los efectivos involucrados en los hechos. Asimismo, se ha constatado una conducta irregular en el caso de la muerte del Sr. Saravia en San Miguel, donde los efectivos de la PNC tardaron cuatro horas en hacer entrega del cadáver al Instituto de Medicina Legal, se produjo un incidente con médicos de ese instituto y con el juez competente y se brindaron versiones sobre los hechos opuestas a las ofrecidas por los testigos.

37. En cuanto al derecho a la integridad personal se registraron 28 denuncias (32,2% del total). Las mismas corresponden a 2 casos de tortura (1 verificado positivamente y otro en proceso de investigación); 13 casos de malos tratos (3 de ellos verificados positivamente, 4 en que no hubo violación y 6 que están siendo investigados); y 13 casos de uso excesivo de la fuerza (2 de ellos verificados positivamente; 5 en que se verificó la inexistencia de la violación y 7 aún pendientes). El caso verificado de tortura se trata en la sección correspondiente de este informe.

38. Respecto al derecho a la libertad personal, la ONUSAL recibió 37 denuncias. Veintinueve casos se refirieron a detenciones arbitrarias (9 verificados positivamente; 13 en que se verificó la inexistencia de la violación; y 7 aún pendientes); 2 casos se registraron por detención arbitraria por falta de policía (aún pendientes); y 6 casos por violación a las garantías procesales (en 4 se verificó positivamente y en los otros 2 no se verificó la violación). El resto de las denuncias corresponden a violaciones al derecho a la seguridad personal (5,7%) y al debido proceso legal (9,2%).

39. Un examen general de la información disponible permite ubicar en dos grupos las principales violaciones denunciadas. El primer grupo está constituido por las violaciones que tienen origen en el desconocimiento o errónea interpretación de la normativa vigente por parte de los policías, como en el caso de las detenciones arbitrarias. A la inexistencia de un marco jurídico uniforme, claro y concreto, que imponga límites precisos a la actuación policial, se le suma la insuficiente formación básica jurídica que reciben los efectivos de la PNC en la Academia Nacional de Seguridad Pública. A través de la verificación ha podido comprobarse también, que en algunos casos la asesoría jurídica con que cuenta la PNC ha sido deficiente e incluso contraria a la doctrina del nuevo cuerpo policial, lo que ha contribuido a la realización de procedimientos irregulares. A ello hay que añadir las deficiencias en el Órgano Judicial y en la defensoría pública, que en muchos casos explican las detenciones arbitrarias.

40. También se ha podido establecer que en algunas ocasiones la actuación policial irregular responde a deficiencias de mando en la PNC. Tanto la línea de mandos como los agentes carecen de orientaciones claras, definidas y uniformes, hecho que propicia que los policías deban llenar, a su propia iniciativa, el vacío dejado por la ausencia de órdenes precisas.

41. El segundo grupo de violaciones se refiere a aquellas que responden a problemas más complejos y profundos, que rebasan la simple negligencia o falta de conocimientos procesales. En esta segunda categoría ingresan principalmente las denuncias por ejecuciones arbitrarias, malos tratos y por uso excesivo de la fuerza. Las ejecuciones arbitrarias denunciadas son todas consecuencia directa

/...

de la utilización excesiva de la fuerza por parte de los efectivos policiales en sus operativos. El recurso a la utilización de las armas de fuego ante cualquier circunstancia sigue siendo una constante. El tema es recurrente y ha estado presente en todas las actividades de formación y cooperación técnica que ha realizado la ONUSAL en relación a la PNC.

42. En cuanto a las alegadas violaciones a la integridad personal, este tipo de situaciones parece reflejar preocupantes actitudes en el nuevo cuerpo policial, que deben ser urgentemente erradicadas. No parece razonable que en algunos casos los responsables jerárquicos de la PNC aleguen "desconocimiento" de hechos que podrían constituir violaciones a los derechos humanos, o que incluso, por acción u omisión, asuman conductas que podrían llegar a perseguir el entorpecimiento de las investigaciones tanto internas como externas.

43. Según surge de los casos relevados, la actitud de los mandos de las delegaciones, subdelegaciones o puestos donde se originan los hechos luego denunciados, así como de las mismas Unidades de Control e Investigación Disciplinaria, no es uniforme. En algunas ocasiones se ha verificado que la respuesta institucional no es clara y contundente; en otras se han detectado alentadoras señales de voluntad para llegar al fondo en las investigaciones. Sin embargo, no se observa una tendencia hacia la necesaria rigidez que en esta etapa fundacional de la PNC deben seguir los procedimientos disciplinarios internos.

44. Los Acuerdos de Paz dotaron a El Salvador de una nueva doctrina de seguridad, inspirada en las normas y principios internacionales. En ese marco se previó el surgimiento de la nueva PNC. Esta nueva policía, regida por una nueva doctrina, debe sin embargo operar y ser eficiente en un esquema de relaciones entre el Estado y la sociedad que, como en toda transición, se modifica lentamente y con signos de ambivalencia. En ese contexto se perciben indicios de un cambio de actitud en la población frente a la policía, a la cual le reclama mayor efectividad en la persecución del delito y la seguridad ciudadana, a la vez que está dispuesta a exigirle un mejor trato, respetuoso de los derechos humanos. Ante esta actitud de la ciudadanía, la PNC se enfrenta a veces con una cierta inseguridad, lo que redundará en actitudes arbitrarias, tales como el uso excesivo de la fuerza, los malos tratos, o el recurso al "irrespeto a la autoridad" permanentemente utilizado como justificativo para realizar detenciones.

45. Las deficiencias en la formación de los agentes y mandos agudiza estos problemas. Son ilustrativos los resultados de la evaluación efectuada a los mandos y ejecutivos de la PNC que asistieron a los cursos-taller de técnica policial y derechos humanos organizados por la División de Derechos Humanos de la ONUSAL en junio y julio de 1994. En cuanto a los mandos, el mayor porcentaje de respuestas equivocadas por tema es el siguiente: nulidad de diligencias (51,3%); precisión de juez competente para remitir un caso (41,0%); procedimiento por faltas (23,1%); y procedimiento de detención (20,5%). Respecto a cabos y sargentos, las mayores carencias registradas fueron en relación a la precisión de juez competente para remitir un caso (51,6%); nulidad de diligencias (41,2%); procedimiento de detención (36,8%) y procedimiento por faltas (25,8%).

/...

46. En relación a los cursos de refuerzo para mandos de la PNC, realizados en septiembre-octubre de 1994, cuyo programa integró los temas referidos, si bien no se ha concluido aún con el análisis de la evaluación de los asistentes, debe señalarse que resulta preocupante que los mandos de las zonas oriental y occidental del país, al igual que los asesores jurídicos de las mismas regiones, no se presentaron a realizar la evaluación correspondiente.

47. Ante estas deficiencias de la actuación policial, es necesario que la PNC refuerce drásticamente la formación de sus efectivos, en particular en lo que se refiere a técnicas y procedimientos de intervención policial. En ese sentido, la Academia Nacional de Seguridad Pública tiene el deber insoslayable de efectuar los ajustes necesarios para la formación de los nuevos efectivos. Asimismo, se torna indispensable fortalecer los mecanismos de control de la PNC, en especial potenciando la labor de la Unidad de Investigación Disciplinaria, de tal suerte que las desavenencias detectadas en la actuación policial sean oportunamente corregidas y sancionadas. Por otra parte, es menester que la PNC proceda a definir en mejor forma su línea jerárquica, de tal suerte que exista una cadena de mandos determinada claramente.

48. Un paso importante para fortalecer a la PNC ha sido el reciente nombramiento de su Inspector General. Sus funciones vitales de control de la PNC, sin perjuicio del acceso que debe tener a toda la estructura de la institución policial, se optimizarían si son ejercidas a través de las Unidades de Control y de Investigación Disciplinaria, las cuales se verían así impulsadas en su consolidación y funcionamiento activo. Asimismo, esta actividad de control a través del Viceministerio de Seguridad Pública será decisiva para la corrección de las deficiencias detectadas, así como para efectuar una mejor coordinación entre la Academia Nacional de Seguridad Pública y la PNC.

E. La emergencia del sistema penitenciario

49. La División de Derechos Humanos ha prestado especial atención a la situación del sistema penitenciario en el país, que constituye uno de los principales factores estructurales de violencia en El Salvador, tal y como lo evidencian los sucesivos amotinamientos presentados en las cárceles durante el transcurso del año. Durante el período que comprende este informe ocurrieron varios hechos violentos en los centros de reclusión del país con resultado en la pérdida de vida de varios reclusos. Varias de las causas de estos hechos, tales como la grave situación de los centros penales en materia de hacinamiento, salud, seguridad, alimentación, régimen disciplinario y administrativo, etc., las he venido señalando al Secretario General en anteriores informes.

50. En el mes de agosto la División de Derechos Humanos presentó al Gobierno, al Órgano Judicial y al Ministerio Público un informe pormenorizado acerca del funcionamiento del sistema penitenciario. Ese informe fue preparado en la lógica de poner al servicio de las autoridades los resultados de la verificación activa y de ofrecer la asistencia técnica de la ONUSAL para la modernización y funcionamiento adecuados del régimen penitenciario en el contexto de la administración de justicia. A partir de dicho informe se ha planteado la necesidad de declarar en emergencia el sistema penitenciario de El Salvador,

/...

desarrollando un plan de acción integral, con la participación de las diversas instituciones vinculadas al quehacer de la administración de justicia.

51. En el diagnóstico contenido en dicho estudio se establece que las deficiencias verificadas por la ONUSAL en el sistema penitenciario hace dos años permanecen incólumes. Tal es el caso del servicio de defensa penal, a cargo de la Procuraduría General de la República, en el que se ha constatado que la mayoría de los defensores públicos desatienden los procesos. A este hecho se le suma la ausencia de un control estricto sobre los abogados negligentes. Perviven, asimismo, las graves deficiencias en la información a los reos acerca de sus derechos y obligaciones y del estado de sus procesos, así como en la comunicación entre el Órgano Judicial y el sistema penitenciario. La División ha podido comprobar que los datos en poder de una y otra institución difieren enormemente, generando confusión.

52. Otro resultado del estudio refleja que pese a la instrumentación de mecanismos legislativos, como la Ley de Emergencia de Presos sin Condena, la retardación de justicia constituye una de las principales causas de la crisis penitenciaria. De un total de 5.976 reclusos en el país al 31 de julio de 1994, sólo 1.191 han sido sentenciados, en tanto que los otros 4.785, equivalentes al 80% de la población reclusa, están siendo procesados.

53. A partir de estos y otros factores se recomienda declarar en emergencia el sistema penitenciario, formulando una serie de sugerencias, a diversas instituciones, sobre cuya base, en el corto y mediano plazo podría empezar a afrontarse la situación, reorientando la política criminológica de El Salvador.

54. Así, se ha recomendado a la Corte Suprema de Justicia dictar un instructivo general dirigido a los jueces de lo penal para ejecutar una revisión de las causas con reo presente en los distintos centros penales del país. Asimismo, que instruya a los jueces acerca del uso discrecional de la detención provisional, de tal suerte que se proceda a ésta con criterio de excepcionalidad, reduciendo de esta forma la congestión en las cárceles. Se ha recomendado también a la Corte velar por la remisión a los centros penales de los autos judiciales de procesamiento, cambios de tipificación del delito, traslado de competencias, así como de cualquier otra circunstancia que afecte la condición del reo frente a la ley; que se impulse el mejoramiento de las condiciones para que se respeten los plazos de instrucción y de sentencia, así como para la agilidad de las comunicaciones al sistema penitenciario acerca de las penas recaídas; que refuerce los controles sobre el trabajo de los Delegados Penitenciarios; que estimule y favorezca, en los términos que especifica la ley, la aplicación de beneficios excarcelatorios de oficio y los mecanismos de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional. Por último, se ha recomendado a la Corte que se ejerzan las facultades previstas por la ley para sustituir los defensores negligentes, dando aviso a la Procuraduría General de la República en aquellos casos en que las irregularidades provengan de sus funcionarios delegados.

55. En el informe se recomienda al Consejo Nacional de la Judicatura que tome, como elementos de evaluación de los jueces, la retardación de justicia en que hayan incurrido respecto de causas con reo recluido, el cumplimiento integral de los objetivos de la visita carcelaria y la capacidad técnica y la oportunidad

/...

para la aplicación de los beneficios excarcelatorios u otros beneficios de similar inspiración.

56. A la Fiscalía General de la República se le ha recomendado, entre otros aspectos, que instruya a los fiscales respecto a la racionalidad y oportunidad con que deben administrar los recursos de apelación frente a decisiones judiciales que impliquen la puesta en libertad del reo, que garantice el acompañamiento fiscal de las visitas carcelarias obligatorias en los términos que dispone la ley, así como que asigne personal fiscal en los puestos de la PNC para ejercer la supervisión y dirección de la investigación criminal.

57. Se ha recomendado a la Procuraduría General de la República que exija a los defensores públicos una mayor diligencia en los procesos con reos presentes, estableciendo mecanismos internos de control sobre el trabajo diligenciado y el número de visitas realizadas al reo, la aplicación de sanciones severas a los defensores negligentes en el desempeño funcional y la asignación de delegados en los puestos de la PNC para garantizar el derecho de defensa de los detenidos.

58. Algunas recomendaciones también han sido dirigidas a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que efectúe un seguimiento más estrecho a la situación penitenciaria, mantenga un archivo censal y estadístico confiable con los datos básicos de la población carcelaria, y realice sugerencias para la elaboración de un reglamento único penitenciario, que regule la conducción administrativa de todos los centros penales del país.

59. Un importante número de recomendaciones ha sido efectuado al sistema penitenciario mismo. Entre ellas las siguientes: disponer mecanismos aptos para mantener actualizada la documentación sobre la situación procesal de los reos; remitir trimestralmente a cada juez penal la nómina de reos a su disposición; disponer medidas de revisión sobre la forma de llevar los libros de control de reos; procurar el cumplimiento de las solicitudes de comparecencia de reos ante los jueces; establecer directivas claras que regulen las decisiones de traslado de reos en consulta con el Órgano Judicial; adoptar medidas inmediatas para iniciar la clasificación y ubicación penitenciaria de los reos; establecer una política de capacitación del personal penitenciario; establecer mecanismos de evaluación periódica del personal penitenciario; reconocer la existencia y funcionamiento de los comités de presos como voceros de las peticiones de la población reclusa y unificar la reglamentación penitenciaria.

60. La División de Derechos Humanos ha extendido sus recomendaciones a la Asamblea Legislativa, para que proceda al análisis y aprobación urgente de las reformas integrales al sistema penal, así como para que, entre tanto, dicte una legislación provisional que apruebe la reducción de la detención provisional, la ampliación del ámbito de la Ley de Emergencia de Presos sin Condena, para que legisle medidas para la aplicación efectiva de las penas distintas a la privación de la libertad y para que apruebe un presupuesto apropiado para el sistema penitenciario.

61. Al gobierno central, además de la recomendación de declarar en emergencia el sistema penitenciario nacional, se le recomienda asegurar que el Ministerio de Justicia dé prioridad a los recursos presupuestarios para el sistema penitenciario, favorecer las recomendaciones efectuadas a las demás instancias y

/...

estimular a la empresa privada para que participe en la creación y desarrollo de actividades laborales en las cárceles.

62. La División de Derechos Humanos continuará atenta al desarrollo de la situación penitenciaria del país, así como a brindar la asistencia técnica que se requiera para la ejecución de las recomendaciones efectuadas.

F. Las organizaciones no gubernamentales

63. Un pilar fundamental del Estado democrático es una sociedad civil robusta y dinámica. En este ámbito, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, son una expresión muy importante. Durante el conflicto armado en El Salvador las organizaciones no gubernamentales tuvieron una función determinante, al denunciar públicamente las violaciones a los derechos humanos. Muchos dentro de sus filas lo pagaron con sus vidas. A partir de la firma de los Acuerdos de Paz, con las graduales mejoras en el respeto a los derechos humanos y el avance de un proceso de reformas en las instituciones del Estado, han aparecido nuevos desafíos y alternativas, frente a las cuales la evolución de las distintas organizaciones no gubernamentales ha sido desigual.

64. El 8 de septiembre, la División de Derechos Humanos efectuó una jornada con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, con el objeto de reflexionar acerca del nuevo rol que éstas deben jugar, y de fortalecer su acción en la perspectiva de la finalización del mandato de la ONUSAL. En dicho encuentro, que contó con la participación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, se le pidió a los participantes examinar, entre otros temas, la forma en que las organizaciones no gubernamentales pueden asumir, en un futuro próximo, la tarea - ejecutada actualmente por la ONUSAL - de verificación y apoyo a las instituciones reformadas o creadas a partir de los Acuerdos de Paz, así como la forma de tomar en cuenta los nuevos espacios existentes para desarrollar una labor propositiva.

65. Hubo consenso en que las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos deben buscar el fortalecimiento de la sociedad civil y en que pueden servir como instrumento de apoyo y control de los órganos del Estado. En ese orden de ideas, se llegó a un consenso de que corresponde cambiar estructuras organizativas y métodos de trabajo, para poder desempeñarse con eficacia en el nuevo espacio público que el Estado de derecho ofrece.

66. En esa perspectiva, surge la necesidad de buscar una especialización temática y una complementariedad en el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, estimando además las posibilidades reales de consecución de recursos financieros y de mejoramiento de su capacidad de convocatoria. La profesionalización, la especialización, la eficiencia y la sistematización son necesidades apremiantes de las organizaciones no gubernamentales en el nuevo marco del país.

67. Ante las nuevas oportunidades para las organizaciones no gubernamentales en la construcción del Estado de derecho, es de lamentar que se verifique un descenso real en los niveles de su financiamiento externo, precisamente cuando la continuidad del aporte financiero es más importante. En ese sentido, reitero

/...

el llamado hecho en mi anterior informe para que la comunidad internacional continúe apoyando financiera y técnicamente a las organizaciones no gubernamentales que se encuentren avanzando en su profesionalización y estén adecuando sus métodos de trabajo y su abordaje del tema de los derechos humanos a la nueva realidad salvadoreña.

G. La fuerza armada

68. La División de Derechos Humanos continúa prestando su apoyo al desarrollo de la nueva doctrina de la fuerza armada. Diversos cursos y conferencias sobre relaciones ejército/sociedad han sido impartidos durante este período. En julio se desarrolló un curso de derechos humanos dentro del "Curso avanzado de infantería", para tenientes, previo a su ascenso al grado de capitanes y durante agosto y septiembre se desarrolló uno similar dentro del "Curso de planas mayores" para capitanes, previo su ascenso a mayores.

69. Por otra parte, en colaboración con el Ministerio de Defensa, la División de Derechos Humanos preparó y editó el libro Doctrina Militar y Relaciones Ejército Sociedad, que compila una serie de ensayos en materia de derechos humanos, sociología militar, moral militar democrática, y relaciones ejército/sociedad en el marco de un régimen constitucional.

III. EXAMEN DE LA VERIFICACIÓN ACTIVA DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

A. Derecho a la vida

70. Durante el período que cubre este informe se recibieron 46 denuncias de violaciones al derecho a la vida. Destacan los casos de muerte derivada del uso excesivo de la fuerza por parte de la PNC. Debo señalar también mi preocupación por las muertes producidas en hechos violentos al interior de los centros penales del país, las cuales, si bien no son atribuibles en forma directa a agentes del Estado, derivan del incumplimiento del deber del Estado de garantizar la seguridad de las personas, en especial cuando éstas, como es el caso de los reos, se encuentran bajo su custodia. Héctor Corea Torres y Roberto Mejía Boruca, reos del penal de La Unión, y Alberto Flores, Nelson Amílcar Escobar y Carlos Cruz Jiménez, reos del centro penal de San Vicente, perdieron la vida en amotinamientos registrados durante el período.

1. Ejecuciones arbitrarias o extralegales

71. En el período se recibieron 18 denuncias de ejecuciones arbitrarias, manteniéndose la leve tendencia a la disminución.

72. Rodolfo Iraheta Contreras. El 16 de septiembre de 1994 se produjo una fuerte discusión entre la víctima (de 68 años de edad), su hijo y su compañera, en su domicilio, situado en la Comunidad Iberia, San Salvador. En ese momento se hicieron presentes efectivos de la PNC, ordenándole a la víctima que saliera a la calle. Al negarse Iraheta sosteniendo que estaba en su casa uno de los

/...

agentes disparó al interior de la vivienda, hiriendo a la víctima en el abdomen. Los policías lo trasladaron al hospital. A causa de la herida, Iraheta falleció el 26 de septiembre.

73. Pedro Osmín Iraheta. El 7 de agosto de 1994, alrededor de las 18.30 horas en una carretera vecinal del Cantón San Felipe, San Vicente, resultó muerto el Sr. Iraheta por disparos efectuados por agentes de la PNC. La víctima conducía un camión, al parecer en estado de ebriedad, en compañía de un menor de 8 años. Según la versión policial, al pasar el camión conducido por la víctima por el lugar, un agente le dio el alto; el vehículo se detuvo y cuando el policía le manifestó que debía registrar el camión, el motorista se negó, tomó una pistola que llevaba sobre el volante, forcejeó con el policía y se dio a la fuga. En ese momento, el agente dio el aviso a otros compañeros que estaban más adelante. Iraheta tiró el vehículo sobre los agentes, a quienes no les quedó más remedio que disparar. Iraheta falleció de un disparo en la cabeza.

74. No obstante, según el menor que viajaba con Iraheta (su sobrino), cuando se conducían por la carretera vio a varios policías caminando, y dice no haber oído ninguna voz de alto: solamente habrían gritado "atájenlo, párenlo". En ese momento escuchó disparos, y su tío cayó sobre él. Dice que su tío llevaba la pistola bajo el asiento, y que de allí la sacaron los policías, junto con los documentos. Luego de los hechos, los efectivos movieron el vehículo, trasladándolo hasta que se le terminó el combustible. Esto implica la alteración del lugar del crimen. Tampoco se encontró el proyectil que dio muerte a Iraheta, que debería haber quedado dentro de la cabina o en el sombrero de la víctima, el que también fue removido.

75. Se ha constatado que los efectivos que participaron en los hechos fueron: David Alvarado Alvarado; José Isidro López Mejía; Henry Oswaldo Maeda Cáceres; José Salvador Lobo Cabrera; Manuel Wilfredo Pino Molina; Juan Gilberto Martínez; Edgardo Antonio Gómez y José Henríquez Ortiz, quienes fueron detenidos por disposición del tribunal competente. Se ha constatado actos de la PNC de San Vicente para entorpecer las investigaciones.

76. Orlando Saravia Rodríguez. El 18 de septiembre de 1994, en El Tránsito, departamento de San Miguel, Saravia fue baleado por efectivos de la PNC que realizaban un operativo. Según la versión policial, en momentos en que el pick-up en el que se conducían los agentes sobrepasaba la bicicleta conducida por la víctima, ésta se detuvo y le apuntó a un agente, tomando una pistola con ambas manos, disparándole en tres ocasiones. Ante la agresión el agente contestó el fuego en dos oportunidades. Según la versión de testigos presenciales, Saravia se conducía en bicicleta por la ruta cuando fue sobrepasado por una pick-up azul, particular, en la que viajaban varios hombres y mujeres de civil, armados con fusiles y pistolas. En ese momento, una mujer que viajaba en el vehículo, disparó dos veces contra Saravia. Luego, esa mujer y un hombre, cargaron al herido en el carro y se alejaron. Los testigos manifiestan que sólo se oyeron dos disparos.

77. Cuatro horas más tarde, las personas que viajaban en la pick-up, que resultaron ser agentes de la PNC, entregaron el cadáver de la víctima en el Instituto de Medicina Legal de San Miguel, justificando la demora en que intentaron llevar a la víctima a recibir atención médica a Usulután, pero que

/...

falleció en el camino y que en el regreso el vehículo se descompuso, por lo que debieron conseguir otro. Al llegar al referido Instituto, un agente de la PNC se negó a entregar al juez un arma decomisada a la víctima. Tampoco se remitió al juzgado dos vainillas de 9 mm que la PNC afirma haber recogido del lugar de los hechos. Aun cuando la versión policial de que la víctima disparó tiene fundamento, debe anotarse que los agentes iban de civil, no se identificaron como policías y que su número era suficiente como para solucionar una posible agresión sin disparar a la víctima. En este caso se concluye que la actuación policial no se enmarcó dentro de las normas que regulan el uso legítimo de las armas de fuego.

2. Amenazas de muerte

78. Es alentador registrar que durante el período disminuyeron significativamente las denuncias de amenazas al derecho a la vida, que pasaron de ser 41 durante los meses de abril, mayo y junio, a 18 durante los siguientes tres meses. Esta disminución podría tener su explicación en la finalización de la etapa electoral.

79. Elías Gutiérrez. El día jueves 30 de junio, Miguel Angel Cruz López, Juez de Primera Instancia de Tejutla, cuando se conducía, en notorio estado de ebriedad, en un coche oficial de la Corte Suprema de Justicia, sufrió un incidente de tránsito al cruzarse con otro vehículo.

80. Entre las 17.00 y las 18.00 horas, el mencionado funcionario, acompañado por Oscar Guardado Calderón, Juez de Paz de La Reina y el secretario de este juzgado; José Rafael Quintanilla, Juez Segundo de Paz de Nueva Concepción y el hermano de éste, Cruz Chavarría Quintanilla; José Antonio Flores, Juez de Paz de Agua Caliente, y el secretario de este Juzgado, se hicieron presentes en el puesto policial de La Reina solicitando el acompañamiento de dos agentes para realizar la búsqueda de la pick-up rojo supuestamente responsable del accidente. El encargado del puesto accedió y todos se dirigieron en búsqueda de Elías Gutiérrez, quien es propietario de un vehículo con las características citadas. Al hallar al supuesto responsable, el Juez de Tejutla atravesó el vehículo en el que se conducía, se sacó un arma y encañonó a Gutiérrez. Los jueces de La Reina y Nueva Concepción hicieron otro tanto, encañonando este último al acompañante del señor Gutiérrez. Ante esto, los dos policías que acompañaban a los jueces, agentes José Jacobo Vásquez Rivera y Wilfredo González Lara, se interpusieron entre los agresores y el atacado, ordenando a los Jueces que entregaran sus armas. El Juez de Primera Instancia de Tejutla por unos momentos apuntó al agente, diciéndole que no tenían autoridad para quitarle su arma y sólo luego de la intervención de las demás personas que lo acompañaban aceptó guardar su arma, aunque en ningún momento aceptó entregarla.

81. Las investigaciones de la ONUSAL han determinado que hay indicios suficientes de que el juez Cruz López se encontraba en estado de ebriedad al momento de tener el accidente y además se han comprobado fehacientemente las amenazas con arma de fuego, tanto por parte de éste como de los jueces de Paz de Nueva Concepción y La Reina. Este caso es particularmente grave, tratándose de un juez de la República.

/...

82. Rubén Sánchez, Comandante Urbano del Ejército Revolucionario del Pueblo durante la época del conflicto armado, actual dirigente político responsable de la Región Occidental por el sector de la Expresión Renovadora del Pueblo con sede en Santa Ana, recibió el sábado 17 de septiembre en su domicilio, una misiva firmada por un grupo irregular autodenominado Ejército Secreto Anticomunista en que le alertaba sobre su eventual ejecución. Según el denunciante, su domicilio no es conocido por los compañeros de partido, manteniéndolo fuera del dominio público por razones de seguridad personal.

83. La víctima sufrió un atentado luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, por individuos desconocidos que lo emboscaron. Le dispararon, hiriéndole de gravedad en la parte inferior de la pierna derecha. Recientemente ha sido hospitalizado en Alemania para la recuperación de su movilidad. Los autores de la misiva conocen cual es su situación de salud, ya que a eso se refieren cuando dicen que "ya estás algo empezado ya ni corres".

84. Asimismo, ha sido víctima en uno de los operativos llevado a cabo el 22 de agosto de 1994 por el Batallón Antidelincuencial de la Policía Nacional en la zona del Volcán de Santa Ana. Al recibir la denuncia de la ONUSAL, su identidad se mantuvo en reserva por expreso deseo del denunciante, quien temía ser objeto de represalias.

85. Un miembro de Expresión Renovadora del Pueblo que mantiene presencia permanente en el local partidario, ha adelantado que durante la semana previa a esta amenaza, han observado que un pick-up de doble cabina de vidrios polarizados marca Toyota con tres individuos parecía mantener vigilancia al local. Uno de los sujetos, que viaja en la cama porta una escopeta y dos pistolas al cinto.

86. Alex Rubio Ramírez, Coordinador del FMLN en Jayaque. El 8 de julio la víctima recibe una llamada telefónica en su residencia donde un individuo no identificado lo amenaza de muerte. Llamadas similares se repiten los días 18 y 22 de julio. En ninguna de estas llamadas, que efectúa siempre la misma persona, se especifican móviles u organización. Alex Rubio Ramírez presentó denuncia judicial el 17 de agosto y ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos el 18 de agosto.

87. ONUSAL contactó al Sargento Iraheta, segundo al mando del puesto policial de la Policía Nacional, en Jayaque, informándole de las amenazas de que estaba siendo objeto la víctima. ONUSAL ha verificado que en el proceso en que se investigan las amenazas no se ha realizado ninguna diligencia y sugirió la designación de un Fiscal Específico, para agilizar la causa.

88. Los antecedentes personales del denunciante no permiten determinar claramente el móvil de las amenazas, pero pareciera que lo más factible es la motivación política por tratarse de una persona vinculada en forma activa como dirigente del FMLN en su localidad.

B. Derecho a la integridad personal

1. Torturas

89. Durante los tres meses que comprende este informe fueron recibidas tres denuncias de tortura. Una de ellas, después de su verificación, resultó plenamente confirmada, en otra existen serios indicios de la responsabilidad de efectivos de la PNC y en otra se llevan a cabo las investigaciones.

90. Carlos Alberto y Miguel Angel Grande Menjívar. El 29 de julio, a las 4.00 horas de la mañana, llegaron al domicilio de las víctimas, ubicado en la colonia El Calvario de La Libertad, seis agentes de la PNC, uno de los cuales es identificado como Francisco Antonio Cornejo, identificándose como pertenecientes a la Unidad Ejecutiva Antinarco tráfico, procediendo a registrar con violencia la vivienda en busca de armas.

91. El 11 de agosto a las 20.30 horas, llegaron nuevamente cinco agentes uniformados vestidos con pantalón azul y camisa color crema, esta vez acompañados de dos personas que vestían de civil. En esta ocasión los sujetos ocultaban sus rostros con capuchas. Ingresaron en el domicilio, procediendo de inmediato a golpear a los hermanos Carlos Alberto y Miguel Angel Grande. Los individuos amarraron a los dos jóvenes sacándolos de la casa, introduciéndolos en dos vehículos estacionados en las proximidades del domicilio. Estuvieron circulando por varios lugares, hasta que encontraron un local lo suficientemente apartado, donde se detuvieron y procedieron a interrogar a las víctimas con la vista vendada. Por separado y bajo golpes de pies y puños comenzaron a preguntarles por el lugar donde se encontraban las armas que les imputaban tener. Posteriormente les colocaron bolsas plásticas en la cabeza. Miguel Angel, de 16 años de edad, fue objeto de quemaduras con cigarrillos, especialmente en el tórax y en una de sus manos. Asimismo, le colocaron el fusil en la boca y apretaron el gatillo del arma que resultó estar descargada. Todo esto para que indicaran el paradero de su hermano, de nombre Gonzalo, a quien imputaban la autoría de la muerte de Jorge Turcios.

92. El informe Médico Legal hace constar la existencia de múltiples lesiones en las víctimas, que fueron también constatadas por ONUSAL y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Las averiguaciones realizadas por ONUSAL señalan que el 29 de julio, el agente Francisco Cornejo, acompañado por otros agentes de la PNC, fue al lugar a buscar a Gonzalo Grande, a quien conocen como un sujeto peligroso que habría dado muerte a dos personas, una de las cuales sería José Turcios, hermano de Cornejo. Atendida la posible autoría del hermano de las víctimas en el homicidio de José Turcios, hermano del agente en cuestión, podría tratarse de una acción "de justicia por mano propia".

93. ONUSAL es consciente de la preocupación de la Unidad de Investigación Disciplinaria de la PNC frente a la gravedad de los hechos denunciados y su disposición a aplicar todas las medidas tendientes a separar de ese cuerpo policial a los miembros que incurran en violaciones a los derechos humanos. Sin embargo la PNC, hasta donde tenemos información, no ha respondido al pedido de informe sobre el caso solicitado por la Procuraduría. Existen serios indicios de la participación del agente Francisco Cornejo en los hechos narrados y el caso se mantiene activo para completar las investigaciones.

/...

94. Joel Gómez Carpio. El 14 de agosto, a las 20.30 horas, la víctima, cobrador de buses, fue golpeada por dos agentes de la PNC de Soyapango, quienes supuestamente concurrieron al lugar donde éste se encontraba al ser llamados por una vecina que supuso que la víctima habría quebrado un vidrio. Propinada la paliza dejaron a la víctima abandonada, la cual, a raíz de los golpes, debió ser conducida por vecinos hasta un centro asistencial de donde lo remitieron al Hospital Rosales para ser sometida a una intervención quirúrgica. Fue dado de alta el 26 de agosto.

95. Como resultado de las investigaciones, realizadas en coordinación con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hay elementos para concluir que los agentes del Cuerpo de la Policía Nacional Civil, Nelson Ignacio Calles Escobar, N° de Identificación 2296 y Rigoberto Misael Díaz Mejía, N° de Identificación 2344, son autores de los hechos que se les imputan.

2. Malos tratos

96. Las denuncias de malos tratos disminuyeron ligeramente en comparación con las registradas durante el período anterior. Un hecho significativo es que en muchos de los casos de malos tratos se verifica también la detención arbitraria de las víctimas.

97. Manuel Quintanilla Arias y José Alejandro Mendoza. En San Miguel, Manuel Quintanilla Arias, de 14 años de edad, se encontraba en un pick-up vendiendo piñas junto a su padre Miguel Angel Quintanilla, cuando se hizo presente la policía municipal y les dijo que si continuaban vendiendo en ese lugar se los llevarían detenidos. Según el menor, éste les contestó que ya saldrían del lugar, dirigiéndose hacia la cabina del pick-up. En ese momento un policía lo tomó del cuello con ambas manos, lo levantó y lo apretó contra la reja de las oficinas de la empresa de teléfonos ANTEL y le dijo unas groserías, luego lo soltó y se llevó una bicicleta de propiedad del menor, al cuartel.

98. Un cliente que compraba piñas, José Alejandro Mendoza, vio cuando el policía agredió al chico, por lo que intervino y le dijo a los tres agentes que se quedaron en el lugar "que lo dejaran porque él no estaba haciendo nada y que no lo maltrataran". Los agentes al escuchar esto, primero que nada le indicaron que no se metiera, porque también se lo llevarían. En seguida, uno de los policías tomó al cliente del pantalón y lo empezó a golpear con patadas, puños y la culata del fusil, en esos momentos llegó en bicicleta un agente de civil y sin más le pegó un golpe de puño en la boca y le dijo otras groserías. Posteriormente lo llevaron para el cuartel.

99. Roberto Quiñones. El 23 de agosto fue detenido por agentes de la PNC de Ilopango y conducido a la bartolina de ese puesto policial. En ese lugar fue golpeado por algunos efectivos de la PNC, causándole serias lesiones constatadas posteriormente por el Instituto de Medicina Legal. Según el oficial a cargo de la unidad policial, Quiñones y otro detenido, en estado de ebriedad, comenzaron a destruir la bartolina, e incluso a amenazar de muerte a uno de los agentes, ante lo cual ordenó a varios de sus subordinados "someter a los detenidos usando un mínimo de fuerza necesaria". A partir de las investigaciones, ONUSAL

/...

concluye que los agentes de la PNC de Ilopango son responsables de los hechos que se les imputan.

C. Derecho a la seguridad personal

Desapariciones forzadas o involuntarias

100. Durante el período que comprende este informe se presentaron dos denuncias de desaparición forzada. Efectuada la verificación, en los dos casos quedó establecida la inexistencia de la desaparición y pudo determinarse el paradero de las supuestas víctimas.

D. Derecho a la libertad personal

101. Durante julio, agosto y septiembre de 1994 se registraron 42 detenciones arbitrarias, un número porcentualmente superior al registrado durante el período anterior.

102. Oscar Antonio Váldez y otros. El señor Wernes Martínez Romero denunció que el día 17 de septiembre fueron detenidos Oscar Antonio Váldez, José Enrique Zelaya, Juan Carlos Ruiz, Juan Abel Díaz, Santos Véliz Pérez, José Elmer Zelaya, Roberto Carlos Campos, Juan Rojas y la menor Rosa Idalia López, por la Policía Municipal de San Miguel, sin motivo justificado, cuando dormían al lado de un camión.

103. ONUSAL al hacerse presente en las instalaciones de la Policía Municipal encontró que efectivamente en las bartolinas estaban en detención ocho jóvenes y una menor de 15 años, ésta última en el pasillo de la institución. Al querer consultar el libro de detenidos, el oficial de guardia manifestó que aún no habían realizado el parte, casi 24 horas después de la detención, y que ésta se había realizado por ser "sospechosos" y obedeciendo una orden del Alcalde Municipal. El señor Wernes Martínez Romero, a fin de lograr la libertad de sus empleados, dejó en depósito al comandante el valor de la multa, a pesar de ello no se ordenó la libertad.

104. El Alcalde, en reunión con ONUSAL, reconoció que efectivamente la Policía Municipal había cometido algunos abusos, justificando éstos como fruto de la lucha contra la delincuencia que azota al país, y que tenía conocimiento de que estas personas se encontraban detenidas supuestamente por sospechas, agregando además que se encontraba dentro del plazo de 72 horas para decretar su libertad.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

105. Los avances en el proceso de transición democrática y de consolidación del Estado de Derecho, previstos por los Acuerdos de Paz de El Salvador, se manifiestan en un cambio del ambiente político y social del país que tiene signos claros. La gradual apertura de espacios parece afianzar el diálogo y la concertación como los instrumentos democráticos legítimos para el ejercicio de las relaciones sociales y la solución de las controversias, a la vez que

/...

descalifican el recurso a la violencia en todos los órdenes, hecho que trae consigo un clima de distensión y sosiego para el ejercicio de los derechos y las libertades individuales.

106. La disminución progresiva de las denuncias admitidas por ONUSAL desde septiembre de 1991 es un indicador útil dentro de un cuadro de mejoras graduales de la situación de los derechos humanos, pese a las ambivalencias que he venido señalando en mis anteriores informes. Sólo durante el mes de septiembre de 1993, por ejemplo, ONUSAL recibió 163 denuncias de violaciones a los derechos fundamentales, frente a 58 denuncias recibidas durante septiembre de 1994. Es un hecho notable que desde hace más de dos años no se produzcan desapariciones forzadas en El Salvador, dato que no tiene precedentes en América Latina y, menos aún, en coyunturas de transición democrática. Es también significativo apreciar que si sólo en septiembre de 1991 ONUSAL admitió 119 denuncias de detenciones arbitrarias, en septiembre de 1994 esa cifra fue de 13 denuncias.

107. En relación con el derecho a la vida, además de la gradual disminución de denuncias por ejecuciones arbitrarias, se hace notorio un cambio en la naturaleza misma de los hechos denunciados, que reproducen cada vez menos las características umbráticas de períodos anteriores, tales como la motivación política y la premeditación. Las ejecuciones arbitrarias registradas durante el período tienen su principal explicación en la impericia de la policía en el ejercicio legítimo de la fuerza, deficiencia que debe ser perentoriamente corregida.

108. Es alentador que durante el período que comprende este informe no se hayan registrado violaciones al derecho a la vida políticamente motivadas. Ello, en buena medida, puede explicarse por el proceso mismo de apertura política y democratización del país, junto con la respuesta dada por el Estado, por la sociedad salvadoreña y por la comunidad internacional, ante la aciaga etapa de violencia selectiva contra ciudadanos con actividad política manifiesta, durante el segundo semestre de 1993. La cooperación de la comunidad internacional en la investigación de estos hechos, materializada en la participación de investigadores extranjeros por invitación del gobierno para la indagación policial, y fundamentalmente en la configuración, por sugerencia del Secretario General, del Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política, parece haber conllevado un elemento disuasivo a la violencia política.

109. Pero más allá de ello, es necesario erradicar definitivamente los vestigios del recurso a la violencia con fines políticos, a la par con el desmantelamiento del crimen organizado sobre cuya base opera. Esto sólo será posible con el robustecimiento y consolidación de las instituciones responsables de la investigación criminal y de la administración de justicia, hechos de los que depende la posibilidad de descorrer la cortina de impunidad que encubre la delincuencia actual y que potencia los riesgos del resurgimiento de actividades criminales políticamente motivadas. Por ello las recomendaciones efectuadas por el Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Irregulares con Motivación Política, para que la Fiscalía General continúe las investigaciones sobre los casos que le fueron entregados, y para la conformación, dentro de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, de una unidad

/...

especializada para la investigación de crímenes políticamente motivados, constituyen acciones de enorme conveniencia.

110. La subsistencia de redes de crimen organizado, en algunas de las cuales hay elementos para presumir la cobertura o la participación de miembros de alta de cuerpos de seguridad y que opera con el margen de impunidad que permiten las deficiencias del sistema judicial, constituye uno de los más graves peligros para el proceso de paz y para la democracia de El Salvador. El sofisticado grado de organización e infraestructura que poseen las estructuras criminales les dan la capacidad de ejecutar sus acciones no sólo en el ámbito de la delincuencia común, sino también de activar, cuando lo requieran, su maquinaria contra los estamentos y personas con actividad política. En el contexto latinoamericano es fácil encontrar ejemplos que indican la gravedad que representa para la estabilidad política y social el hecho de no combatir y erradicar a tiempo las estructuras criminales.

111. El proceso de fortalecimiento institucional comienza a superar sus vicisitudes para ser una realidad en marcha. Durante el período que comprende este informe se registran progresos en el sistema judicial, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil y se perciben mejores condiciones para la ejecución de las recomendaciones pendientes en materia de administración de justicia y derechos humanos.

112. La elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, por consenso de la Asamblea Legislativa, constituye un paso importante para garantizar la autonomía e imparcialidad que le son esenciales como cabeza del Órgano Judicial, a la vez que brinda circunstancias más propicias para profundizar en la reforma judicial. La voluntad de la nueva Corte Suprema de Justicia para impulsar ese proceso se ha comenzado a materializar en algunas acciones de reorganización del aparato judicial y en su intención manifiesta de proceder a la depuración del Órgano Judicial. Estas acciones optimizarían sus resultados con un hincapié en el proceso sostenido de profesionalización de los miembros del sistema de administración de justicia y con una estrategia de formación integral de los jueces y los fiscales, endilgada hacia la definición del nuevo perfil que requieren tales funcionarios en un sistema judicial democrático, que merece del apoyo de la comunidad internacional.

113. Los mayores tropiezos en el proceso de consolidación institucional están dados por el retraso en la aprobación de ciertas reformas legales pendientes. Así lo corroboran los resultados de una encuesta anónima realizada con fiscales, jueces de paz y jueces de primera instancia sobre las principales deficiencias de la administración de justicia. De igual forma, el perfeccionamiento de los medios de protección de los derechos humanos pasa, en El Salvador, por la aprobación de los diversos instrumentos internacionales y por la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pese a ser recomendaciones reiteradas no se han ejecutado. Estos hechos me llevan a sugerir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia que procedan al impulso en la Asamblea Legislativa para la pronta aprobación de las reformas pendientes.

114. Son positivos los avances registrados en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en su proceso de consolidación institucional. La

/...

prosecución de la cooperación técnica y la adopción, a partir de julio, de un mecanismo de verificación conjunta entre la División de Derechos Humanos y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, han sido determinantes para que la institución nacional amplíe y fortalezca la protección de los derechos humanos y esté en mejores condiciones de asumir las actividades de verificación realizadas por ONUSAL al momento de su retiro del país. La cooperación de ONUSAL, enmarcada en un proceso de reformas del sistema de tutela de la Procuraduría, junto con la continuidad en su despliegue territorial, requieren, sin embargo, que el gobierno y la Asamblea Legislativa le otorguen una asignación presupuestal adecuada a sus necesidades.

115. El progreso en el despliegue de la PNC requiere, en esta etapa, ser complementado con una mayor profesionalización y especialización de las actuaciones policiales, así como con el fortalecimiento de sus mecanismos de control y la mejor definición de su cadena de mandos. En ese sentido, el nombramiento, durante el período, del Inspector General de la PNC constituye un importante avance. Es necesario, además, que los ajustes en la PNC se complementen con acciones del Órgano Judicial, de la Procuraduría General y de la Fiscalía General para superar aquellas deficiencias que dificultan el desempeño policial, así como con una mejor articulación entre la institución policial y la Academia Nacional de Seguridad Pública.

116. Las deficiencias verificadas por ONUSAL en el sistema penitenciario hace dos años permanecen sin solución. Este hecho, sumado a los sucesivos amotinamientos presentados en los centros penales del país me llevaron a sugerir que se declare en emergencia el sistema penitenciario, formulando una serie de propuestas a diversos estamentos del Estado para la ejecución interinstitucional de soluciones a la crisis que vayan más allá del mejoramiento de la infraestructura carcelaria. He sugerido que se establezca un plan integral de reorientación de la política criminológica salvadoreña que suponga, entre otras acciones, las siguientes: que la Corte Suprema de Justicia dicte una serie de instructivos a los jueces acerca del uso discrecional de la detención provisional, de la información de los reos acerca de cualquier circunstancia que afecte su condición frente a la ley y el refuerzo del control sobre los delegados penitenciarios. A la Fiscalía, que instruya a los fiscales respecto a un uso más selectivo de la apelación frente a órdenes de libertad provisional y a la supervisión y orientación de la investigación criminal. A la Procuraduría General de la República, que establezca mecanismos internos de control de la actividad de los defensores en procesos con reo presente. Estas acciones serían complementarias a las que debe realizar el gobierno central y el sistema penitenciario mismo, tales como el aumento de los recursos presupuestarios y la unificación de la reglamentación penitenciaria.

Notas

^a Resolución 2200 A (XXI), anexo.

^b E/CN.4/Sub.2/1987/12/Add.1.

^c International Legal Materials, vol. 28 (1989), págs. 161 a 169.

V. ESTADÍSTICAS

Cuadro 1

Estadísticas del análisis de coyuntura

(1º de julio a 30 de septiembre de 1994)

| Denuncias admitidas por la ONUSAL | Julio | Agosto | Septiembre | Total |
|---|-------|--------|------------|-------|
| <u>Violaciones al derecho a la vida</u> | | | | |
| Ejecución arbitraria | 4 | 8 | 9 | 21 |
| Tentativas de ejecución arbitraria | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Amenazas de muerte | 9 | 7 | 4 | 20 |
| <u>Violaciones al derecho a la integridad</u> | | | | |
| Tortura | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Malos tratos | 10 | 10 | 5 | 25 |
| Uso excesivo de la fuerza | 6 | 6 | 3 | 15 |
| <u>Violaciones al derecho a la seguridad personal</u> | | | | |
| Desaparición forzada | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Secuestro | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Otras amenazas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| <u>Violaciones al debido proceso legal</u> | | | | |
| <u>Garantías procesales</u> | | | | |
| Derecho a ser juzgado por juez en plazo razonable | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Derecho a la defensa | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Derecho a no ser coaccionado | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Derecho a la instancia plural | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Derecho a la justicia</u> | | | | |
| Deber jurídico del Estado de investigar y sancionar | 11 | 8 | 9 | 28 |
| Derecho a la indemnización | 0 | 1 | 1 | 2 |
| <u>Violaciones al derecho a la libertad personal</u> | | | | |
| Detención arbitraria | 20 | 10 | 13 | 43 |
| Detención arbitraria por falta de policía | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Garantías procesales | 8 | 3 | 0 | 11 |
| <u>Violaciones al derecho a la libertad de expresión</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Violaciones al derecho a la libertad de asociación</u> | | | | |
| Derecho a asociarse libremente | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Libertad de reunión | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libertad sindical | 0 | 0 | 1 | 1 |
| <u>Violaciones al derecho a la documentación personal</u> | | | | |
| A obtener documentos de identidad personal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A obtener documentos de estado civil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 92 | 71 | 59 | 222 |

/...

Cuadro 2

Registro de denuncias admitidas por la ONUSAL contra la
Policía Nacional Civil

(1° de julio a 30 de septiembre de 1994)

| Denuncias admitidas por la ONUSAL | PNC | Verif. Pos. | Por derecho | Porcen- taje |
|--|-----|----------------|----------------|-----------------|
| <u>Violaciones al derecho a la vida</u> | | | 9 | 10,3 |
| Ejecución arbitraria | 8 | 3 | | |
| Tentativas de ejecución arbitraria | 0 | 0 | | |
| Amenazas de muerte | 1 | 1 | | |
| <u>Violaciones al derecho a la integridad</u> | | | 28 | 32,2 |
| Tortura | 2 | 1 | | |
| Malos tratos | 13 | 3 | | |
| Uso excesivo de la fuerza | 13 | 2 | | |
| <u>Violaciones al derecho a la seguridad personal</u> | | | 5 | 5,7 |
| Desaparición forzada | 0 | 0 | | |
| Secuestro | 0 | 0 | | |
| Otras amenazas | 5 | 1 | | |
| <u>Violaciones al debido proceso legal</u> | | | 8 | 9,2 |
| <u>Garantías procesales</u> | | | | |
| Derecho a ser juzgado por juez en plazo razonable | 2 | 1 | | |
| Derecho a la defensa | 1 | 1 | | |
| Derecho a no ser coaccionado | 0 | 0 | | |
| Derecho a la instancia plural | 0 | 0 | | |
| <u>Derecho a la justicia</u> | | | | |
| Deber jurídico del Estado de investigar y sancionar | 5 | 0 | | |
| Derecho a la indemnización | 0 | 0 | | |
| <u>Violaciones al derecho a la libertad personal</u> | | | 37 | 42,5 |
| Detención arbitraria | 29 | 9 | | |
| Detención arbitraria por falta | 2 | 0 | | |
| Garantías procesales | 6 | 4 | | |
| Total | 87 | 26 | | 100 |

/...

Cuadro 3

Presuntos responsables denunciados

(1° de julio a 30 de septiembre de 1994)

| Presuntos responsables | Julio | Agosto | Septiembre | Total | Porcen- taje |
|--|-------|--------|------------|-------|-----------------|
| Miembros Policía Nacional | 20 | 9 | 2 | 31 | 14,0 |
| Grupos irregulares | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,4 |
| No identificados | 12 | 11 | 11 | 34 | 15,3 |
| Miembros Policía Municipal | 4 | 1 | 3 | 8 | 3,6 |
| Miembros PNC | 32 | 25 | 27 | 84 | 37,8 |
| Miembros fuerzas armadas | 1 | 4 | 2 | 7 | 3,2 |
| Ministerio público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Órgano Ejecutivo | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,4 |
| Órgano Judicial | 18 | 13 | 9 | 40 | 18,0 |
| Miembros (Unión Ejecutiva Antinarcotráfico) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,9 |
| Miembros (Comisión Investigadora de Hechos Delictivos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FMLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Otros | 2 | 5 | 3 | 10 | 4,5 |
| Total | 92 | 71 | 59 | 222 | 100,0 |

/...

Cuadro 4

Denuncias admitidas por categoría de derecho vulnerado

(1° de julio a 30 de septiembre de 1994)

(Porcentaje)

| Violación | Julio | Agosto | Septiembre | Total |
|------------------------|-------|--------|------------|--------|
| Vida | 16,3 | 21,13 | 27,12 | 21,52 |
| Integridad | 18,48 | 25,35 | 13,56 | 19,13 |
| Seguridad | 10,87 | 11,27 | 11,86 | 11,33 |
| Debido proceso | 20,65 | 22,53 | 16,95 | 20,04 |
| Libertad personal | 32,61 | 18,31 | 27,12 | 26,01 |
| Libertad de expresión | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Libertad de Asociación | 1,09 | 1,41 | 3,39 | 1,96 |
| Documentación personal | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100,00 |

/...

Cuadro 5

Denuncias admitidas por ONUSAL

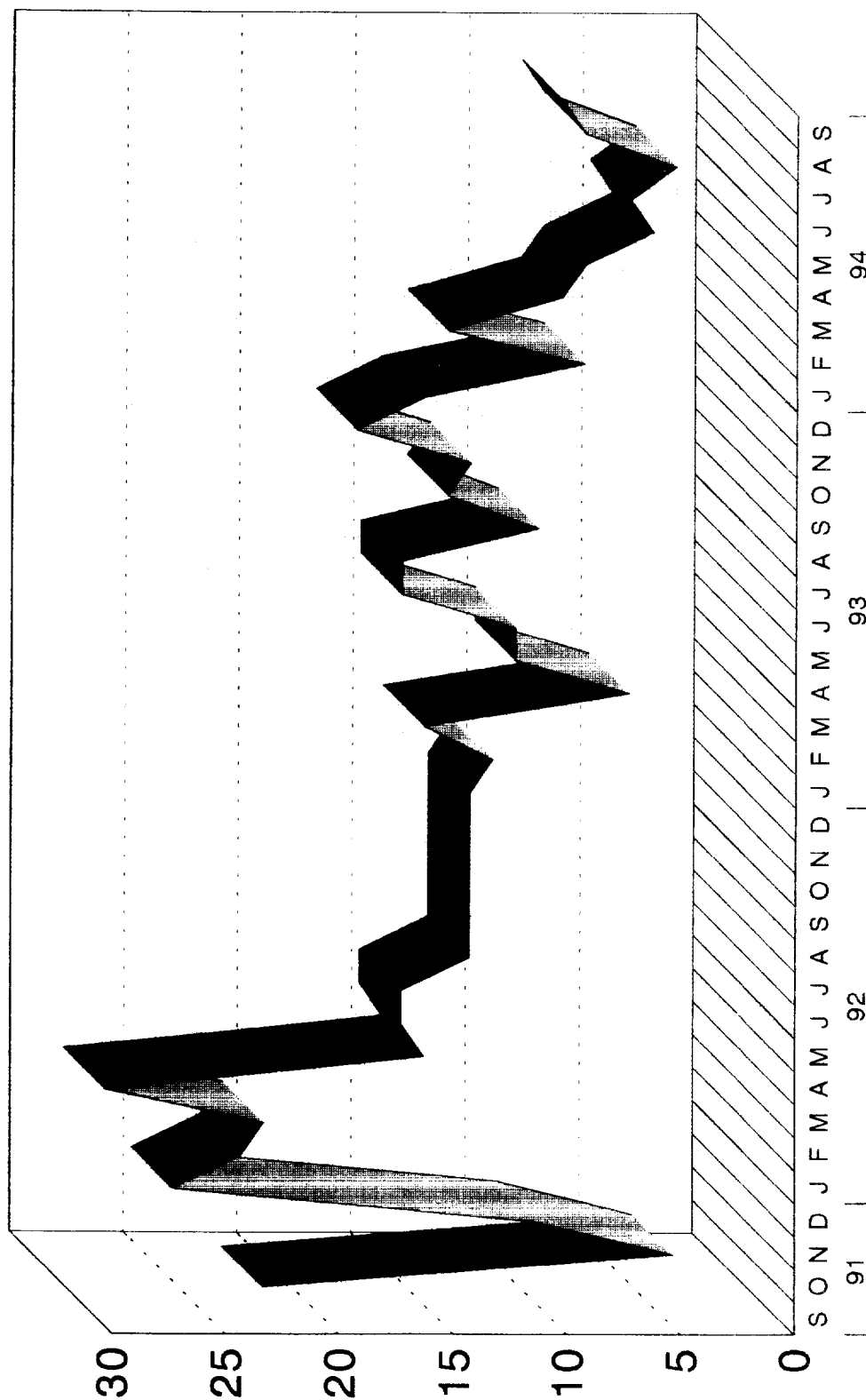
(Agosto 1992 - septiembre 1994)

| | 1992 | | | | | | | | | | | | 1993 | | | | | | | | | | | | 1994 | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| | SUBTOTAL AGO. - DIC. | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAYO | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAYO | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Denuncias admitidas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Violaciones al derecho a la vida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EJECUCIONES ARBITRARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TENTATIVA DE EJECUCIÓN ARBITRARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMENAZAS DE MUERTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Violaciones al derecho a la integridad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TORTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MALOS TRATOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO EXCESIVO DE LA FUERZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Violaciones al derecho a la seguridad personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESAPARICIÓN FORZADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECUESTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS AMENAZAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Violaciones al debido proceso legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantías procesales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHO A SER JUZGADO POR UN JUEZ EN PLAZO RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHO A LA DEFENSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHO A NO SER COACCIONADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHO A LA INSTANCIA PLURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Derecho a la justicia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEBER JURIDICO DEL ESTADO DE INVESTIGAR Y SANCIONAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Violaciones al derecho a la libertad personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETENCIÓN ARBITRARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETENCIÓN ARBITRARIA POR FALTA DE POLICÍA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GARANTÍAS PROCESALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Violaciones al derecho a la libertad de expresión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Violaciones al derecho a la libertad de asociación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHO A ASOCIARSE LIBREMENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIBERTAD DE REUNIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIBERTAD SINDICAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Violaciones al derecho a la documentación personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A OBTENER DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A OBTENER DOCUMENTOS DE ESTADO CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gráfico 1

EJECUCIONES ARBITRARIAS

Denuncias admitidas por la ONUSAL

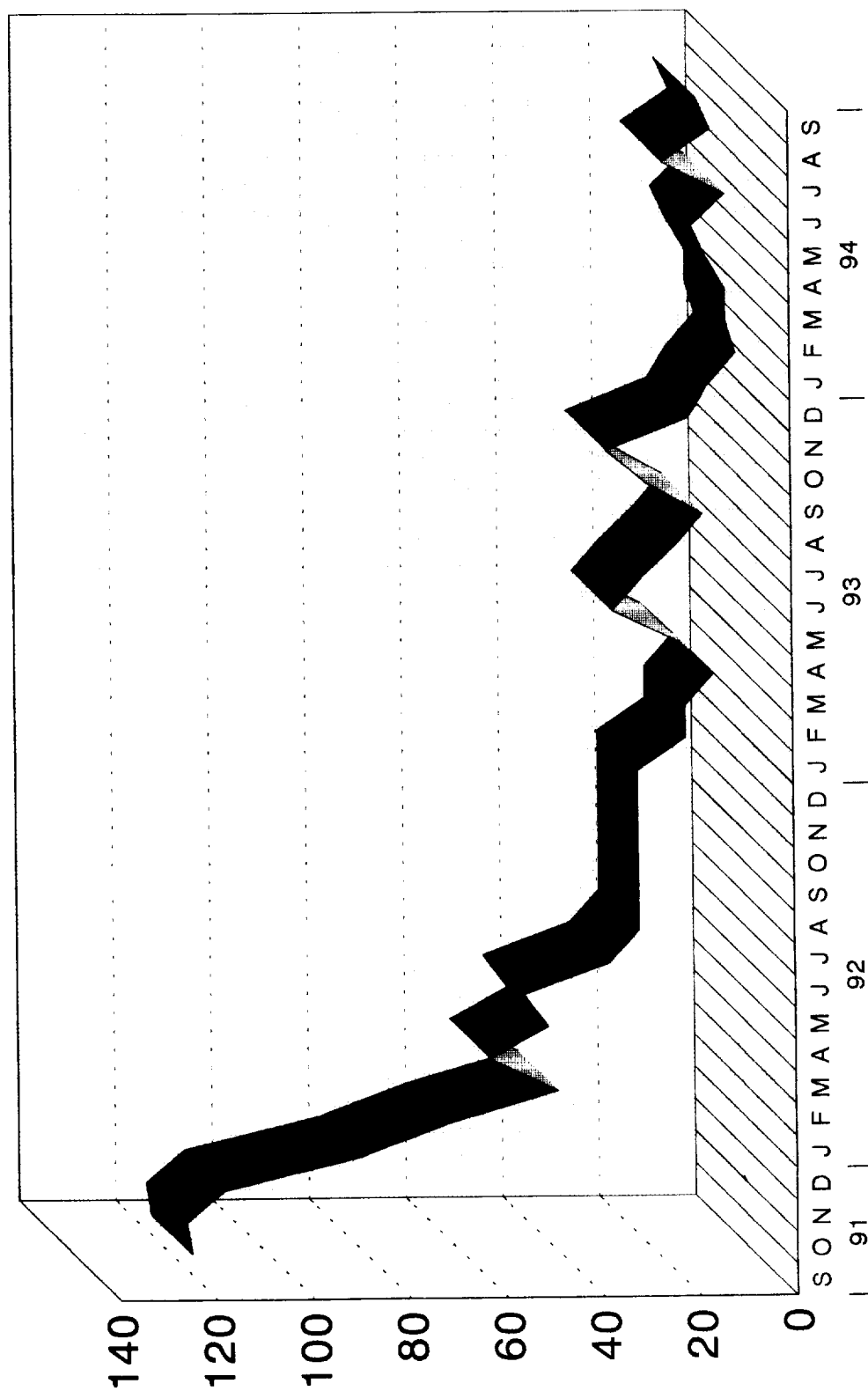


Septiembre de 1991 - Septiembre de 1994

Gráfico 2

DETENCIONES ARBITRARIAS

Denuncias admitidas por la ONUSAL



Septiembre de 1991 - Septiembre de 1994

Cuadro 6
Desapariciones forzadas

| Casos de desapariciones forzadas pendientes Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas (Comisión de Derechos Humanos) (Década de 1980) | Denuncias de desapariciones forzadas verificadas positivamente por la ONUSAL 1992-1994 |
|--|---|
| 2 219 | 0 |
